

# ¡FONDO DE EMERGENCIA YA!



El próximo domingo 26 vence la nueva prórroga de la cuarentena. Se pasó de la cuarentena total a la denominada “administrada”. El gobierno evita usar la palabra “flexibilización” pero la hay de hecho, como lo muestra la mayor cantidad de trabajadores que está circulando. Se ha permitido la apertura de varias actividades por presión de las patronales. A los grandes empresarios les interesa reactivar sus ganancias, no la salud de la población. Esto se combina con la desesperación de grandes sectores populares empujados a romper el aislamiento para ganarse el pan ante una asistencia social que no alcanza o llega en cuentagotas. Por ejemplo, a quienes hacen changas y monotributistas de las categorías más bajas se les dio 10.000 pesos de pobreza que recién ahora están cobrando, quedando millones afuera a pesar de estar inscriptos y necesitarlo desesperadamente. Como proponemos desde el Frente de Izquierda, a esos sectores se les debería dar un ingreso en la cuarentena de 30.000 pesos y no solo por única vez, sino sostenerlo mientras dure la emergencia. Por eso decimos que si el gobierno habla de que no hay que tirar por la borda lo ya conquistado, tiene que tomar medidas de fondo en la cuarentena poniendo toda la plata que haga falta en la salud y en los sectores obreros y populares, pequeños comerciantes y talleres para combatir de verdad el coronavirus y permitir que millones puedan cumplirla sin apremios.

Alberto Fernández acaba de implementar el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) para auxiliar a las patronales y pagar gran parte del salario de los trabajadores. Esta medida cae bien en amplios sectores de trabajadores que ven una asistencia estatal para no perder tanto con los recortes de sueldos pactados entre las patronales y la burocracia sindical. Sin embargo, esto está lejos de resolver el problema de fondo de la clase trabajadora. No solo porque va a ser aprovechada hasta por una multinacional que va a alegrar una “crisis” para recibir el pago de parte de los salarios financiado por el pueblo trabajador, sino porque estas mismas patronales no están obligadas a que a cambio no rebajen los actuales salarios, ni tampoco acuerden despidos o suspensiones. Es lo que vienen haciendo de la mano de la traidora dirigencia sindical y con el aval del ministerio de Trabajo, que homologa los acuerdos. Por eso la medida fue saludada por las cámaras empresariales y cuenta con el inestimable apoyo de la burocracia sindical, que en vez de defender el salario y los puestos de trabajo viene pactando lo contrario mientras deja en banda las peleas en curso, como la de los trabajadores de Penta o la de los de la salud por insumos y una mayor protección.

Lo que estalló desde hace días con los contagios y algunos fallecidos entre los profesionales y trabajadores de la salud es que la Argentina está en la cima mundial de infectados en el sector, algo sumamente preocupante que debería llevar a que el gobierno tome las medidas necesarias para proteger a todo el personal y dotar a los hospitales de los insumos y faltantes para hacer frente a la pandemia. Los muertos y contagiados en los nosocomios demuestran que no es cierto que “los hospitales están preparados”, como vino sosteniendo el gobierno. Casualmente, la asamblea y el corte de calle que hicieron los trabajadores del Hospital Belgrano de San Martín, como tantas otras expresiones de protesta y reclamo en la gran mayoría de los centros de salud públicos y priva-

Gravar la riqueza tiene un apoyo popular del 80%. Sin embargo, si bien diputados del gobierno anunciaron que iban a presentar un proyecto de ley al respecto, al día de hoy no lo han hecho. Esgrimen que el tema debe ser aprobado por el Congreso (que no se reúne) y previamente, como lo pidió Cristina Fernández, la Corte Suprema se debe expedir sobre si sería válida o no esa ley en caso de ser aprobada. Atento a estos vericuetos, el diputado nacional y autor del proyecto junto a Máximo Kirchner, Carlos Heller, dijo: “Con suerte, en unas semanas lo vamos a estar presentando”, aclarando que no va a tocar las ganancias de las empresas. Más allá de cómo termine siendo la propuesta del gobierno, exigimos que la apliquen cuanto antes. La emergencia no puede esperar.

Otro tanto pasa con la deuda externa. El gobierno hizo una oferta de pago a los bonistas (usureros) en medio de la pandemia y la tremenda crisis social. Propuesta que, si bien contempla para esa parte muy pequeña de la deuda que se está renegociando la postergación de los pagos por algunos años y una quita, esto no implica ningún “no pago” de la deuda, sino nuevos desembolsos que deberán hacerse con más sufrimientos, tanto los actuales como los que vendrán. Sin entrar en detalles sobre el tema —que en esta edición digital de El Socialista será abordado en otras notas—, lo cierto es que el gobierno ha

## Fondo de emergencia ya: ¡Plata para salud! ¡No a la rebaja salarial!



dos, coinciden en que no tienen lo indispensable para hacer frente a la pandemia, no se hacen los tests ni se los consulta para diseñar la mejor política para enfrentar al coronavirus.

Para todo esto se necesita plata. Y desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad venimos señalando claramente de dónde sacarla: concretamente de un fondo de emergencia sobre la base de impuestos a los grandes empresarios, banqueros y multinacionales y el no pago de toda la deuda externa.

Los diputados Nicolás del Caño y Romina Del Plá, como parte del Frente de Izquierda Unidad, han hecho punta presentando en el Congreso el primer proyecto de ley para gravar mediante un impuesto especial y progresivo a los grandes patrimonios, las ganancias de los bancos, las altas rentas, a los terratenientes y viviendas ociosas. Esto permitiría recaudar 20.000 millones de dólares (dos veces más del total de lo que destinó el gobierno hasta ahora a la crisis), dinero que debería destinarse de manera urgente a los hospitales y a los millones de trabajadores y demás sectores populares que lo necesitan.

reconocido que esta medida le permitiría “ahorrar 4.500 millones de dólares en lo que resta del año, dinero que equivale a 3,2 veces el presupuesto asignado al Ministerio de Salud para todo 2020”. Pues entonces exigimos de manera urgente que ese monto sea destinado ya a todos los hospitales, no a más prebendas patronales. De la misma forma decimos que si se hubieran invertido en salud los otros 4.500 millones de dólares que ya pagó el gobierno en conceptos de vencimientos de deuda desde que asumió, la situación sería muy distinta, tanto en los hospitales como en la atención de las necesidades de los distintos sectores populares.

Volvemos a reiterar, exigimos una cuarentena con plata para salud y los hospitales. Una cuarentena sin hambre, sin suspensiones y despidos, ni rebaja salarial. Una cuarentena donde la crisis la paguen las patronales, no los trabajadores. Y para ello señalamos que hay que implementar de inmediato un fondo de emergencia, a la vez que apoyamos todos los reclamos obreros y populares en salud, contra los despidos, las suspensiones, la rebaja de salarios, los cierres de empresas y los distintos ataques que está sufriendo el pueblo trabajador.

# Cuidemos a los que nos cuidan

Escribe **Mónica Méndez**  
secretaria de Organización de la Cicop

“Esto tiene que ver con que no se usó correctamente la ropa, no se sacaron correctamente la ropa, o muchos de ellos concurren con fiebre a trabajar. Tenemos que ser menos omnipotentes y entender que si tenemos un síntoma, lo primero que tenemos que hacer es no ir a un lugar donde podemos contagiar a mucha gente”. Éstas fueron las palabras del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García frente al hecho tremendo de que el 14% de los contagiados por el Covid 19 forman parte del personal de salud, y coloca a nuestro país en los primeros lugares del ranking mundial del sacrificio

Un mar de quejas inunda las redes sociales por la falta de equipamiento de protección personal. Los trabajadores hacen demostraciones callejeras, elevan peticiones, realizan asambleas e interponen recursos de amparo en todo el país. Hay jueces que emplazan a responsables de establecimientos públicos y privados para proveer los insumos de protección necesarios, pero el ministro, con desparpajo patronal, culpa a las víctimas e, incluso, insinúa con cinismo, que son los trabajadores los que contagian.

Pero el contagio existe y se extiende. Además del Hospital Belgrano, en la Capital Federal hay personal contagiado en los hospitales Fernández, Ramos Mejía, Tornú; en La Plata los hospitales Gutiérrez, Gonnet y Cestino de Ensenada donde se cerró la terapia intensiva; en Río Negro y en el Chaco. Tanto el gobernador Kicillof como el jefe de gobierno Rodríguez Larreta convocaron a profesionales jubilados para prestar servicios con la carnada de permitirles cobrar su nuevo sueldo manteniendo el cobro de su jubilación; medida desatinada dado que se trata de gente añosa y de alto riesgo de perder la vida en caso de enfermar.

## Los comités de crisis con participación de los trabajadores

En sintonía con Ginés y con el mismo olvido de la verdad, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos

Aires, Daniel Gollán declaró que “los hospitales bonaerenses están completamente abastecidos”. Afirmaciones que son desmentidas a diario por los trabajadores, como denunciaron públicamente la semana pasada los trabajadores del Hospital Belgrano de San Martín, donde hubo 25 contagiados. El director de ese hospital trató por todos los medios de evitar la participación de los trabajadores en el comité de crisis que era limitado a algunos jefes de servicio. Profesionales y enfermeros querían intervenir para lograr medidas de protección. Ese fue uno de los ejes del enfrentamiento. En virtud de la situación creada en ese establecimiento, el ministerio aceptó el reclamo de Cicop de constituir comités de crisis con participación de los trabajadores. Este lunes 20 se realizó en La Plata la primera reunión central, con los gremios y autoridades del ministerio y se adoptaron varias medidas de protección de los trabajadores, entre ellas, la recomendación de crear estos comités en cada uno de los hospitales.

## El poli empleo favorece el contagio

El poli empleo se funda en los bajos salarios. Décadas de salarios a la baja han naturalizado esta costumbre, que es, lisa y llanamente, superexplotación. Médicos, enfermeros, técnicos, todos trabajan 12 o más horas por día, incluyendo sábados y domingos. Para un costo de la canasta familiar de 60.000 pesos (Indec), los sueldos del ingresante no superan los 25.000 para una enfermera y los 38.000 para un médico. Estos bajos sueldos los obligan a ir de un empleo a otro. Esta situación, que ya era extenuante y predispone a enfermarse, se ve agravada ahora porque el trabajador sufre, además, una prolongada exposición diaria y semanal al riesgo de contagio multiplicándose por dos o por tres de acuerdo a los sitios que concurra.



Si bien la defensa de su propia salud es hoy el eje de las preocupaciones del personal de salud, su lucha por el salario no se detiene. Sigue su curso en la provincia de Buenos Aires (donde el gobierno ofreció un mísero 20%), en Santa Fe, en Chubut donde los trabajadores cobran con un mes de retraso y en Tucumán donde el gobernador Manzur anuló unilateralmente la cláusula gatillo. Los gobernadores persiguen a los trabajadores que defienden legítimos reclamos como en Tucumán la persecución de que es objeto Cristian Luna, secretario general del SITE (sindicato tucumano de enfermeros), como también lo hacen en La Rioja, Catamarca y Jujuy.

Denunciamos muchas veces que el gobierno no cuidaba al personal de salud. Hoy, con la elevada tasa de contagiados, nadie puede dudar de la corrección de nuestra denuncia. Es necesario reforzar la lucha de los trabajadores de salud que tiene una doble faz: por un lado, la pandemia, por el otro la lucha por no enfermarse. El personal sanitario reclama hoy, elementos para protección personal, test para identificar los portadores del virus y comités de crisis por establecimientos para defenderse.

## Clínicas privadas: estatizarlas para enfrentar la pandemia

Escribe **Reynaldo Saccone**  
ex presidente de la Cicop

“Al personal de sanidad no nos contagian los pacientes, nos contagian los otros. Estuvimos tres días discutiendo con la patronal el aislamiento de un camillero que trasladó dos veces a un paciente con Covid y finalmente dio positivo. Mientras no la aislamos, esa persona pudo haber contagiado tal vez a tres personas más”, dijeron los delegados de los trabajadores de Sanidad (ATSA). Al menos treinta y cuatro empleados del Sanatorio de la Providencia, del barrio porteño de Balvanera, dieron positivo y se espera aún el resultado de más tests. Entre ellos médicos, enfermeros, camilleros y personal de administración del centro de salud. Solo cuatro de ellos están internados y el 70% permanece asintomático.

Los trabajadores sostienen que la empresa propietaria de la clínica no respeta los protocolos de seguridad ante casos sospechosos ni entre los pacientes, ni entre trabajadores, quienes debían presentarse a trabajar igual. Hasta llegaron a negarle la atención por guardia a quienes acusaban sintomatología compatible con el virus. “Nos decían que era por la vacuna de la gripe que nos aplicaron, pero no era eso. Hay pacientes con coronavirus y ellos lo niegan”. La clínica tampoco proveyó los elementos de protección personal a todos los trabajadores alterando, de hecho, los protocolos.

En el mismo sentido denunció la semana pasada, en una carta abierta a la comunidad, el médico cordobés, portador sano del Covid-19 que, presuntamente, introdujo involuntariamente el virus en el instituto geriátrico donde trabajaba. “En el geriátrico no había elementos de protección, no había alcohol en gel y las manos se las secaban en una



toalla comunitaria o en los ambos, solo ponían un rollo de papel por día para secarse las manos. No prepararon adecuadamente al personal. No se definieron las zonas de aislamiento y circulación. No restringieron a tiempo el acceso de visitas, cuando debió hacerse anteriormente”.

## La renta del capital es el objetivo del sector privado en salud

En el sistema privado, tanto clínicas como geriátricos son empresas capitalistas y como tal su objetivo principal es la renta del capital. Es decir, bajar los salarios, aumentar la productividad del personal y eliminar los gastos improductivos como, por ejemplo, los elementos de protección. Eso es lo que pasó en estos dos establecimientos que tomamos como ejemplo. También pasa en el Hospital Italiano o el Sanatorio Güemes. La sed de ganancias de la patronal de salud es tal que, en plena pandemia, la confederación que los agrupa pide subsidios al gobierno para “afrentar los gastos”, silenciando que en conjunto las clínicas privadas deben 10.000 millones de pesos a la AFIP, sin contar los intereses.

La industria sanatorial privada representa la tercera parte del gasto total en salud del país, equivalente a 3% del PBI, más que el 2,75% que corresponde al gasto total del Estado en salud, sumando Nación, provincias y municipios. Pero, mientras el sector público atiende con esa porción del producto nacional al 40% de la población, el privado vuelca un poco más de esa cantidad solo para atender al 8% de la población.

## Estatización de la totalidad del sistema de salud

Esta importante masa de recursos sanitarios debe ser puesta al servicio del todo el pueblo y no solo de una minoría. El gobierno debe nacionalizar la totalidad de las instalaciones privadas, sanatorios y laboratorios y ponerlos a trabajar bajo control de sus trabajadores. El mismo tratamiento que al sector privado debe darse a la totalidad de las obras sociales, nido de corrupción de la burocracia sindical. La producción y distribución de insumos, tests, reactivos, medicamentos, vacunas y todo otro elemento necesario para combatir la pandemia debe pasar a manos del Estado, bajo control de sus trabajadores. También debe suspenderse la vigencia de las patentes nacionales e internacionales que impidan la elaboración de estos insumos. Este enorme flujo de recursos materiales y humanos gestionado por el Estado, bajo control de sus trabajadores, permitirá encarar acciones que hoy parecen imposibles, como la extensión del testeo a todo el personal de salud y a quienes deben estar expuestos al contacto con el público y, al mismo tiempo, elaborar y proveer los insumos y medicamentos necesarios para enfrentar la pandemia.

## Conversatorio de los trabajadores de la salud

Saludamos la importante presencia con que contó la realización el pasado viernes 17 del conversatorio virtual convocado por los trabajadores de la salud de Izquierda Socialista e independientes junto a un panel compuesto por: Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop, Mónica Méndez, secretaria de organización de la Cicop, Cristian Luna secretario general del SITE (sindicato tucumano de enfermeros), Iván Sotomayor enfermero del hospital Álvarez, docente de la escuela de enfermería Grierson y miembro de la interhospitalaria de CABA y Diego Saavedra delegado del hospital Garrahan (ATE).

En esta primera reunión, donde se superaron los 50 participantes, se debatió sobre cuál es la situación de la salud pública, la de sus trabajadores y como tenemos que organizarnos en su defensa, en medio de la pandemia del Covid 19.

Las exposiciones nos fueron mostrando cuáles son las

carencias más importantes y las dificultades a las que nos enfrentamos a diario en provincias como Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz y en CABA, en las cuales predominaban la falta de insumos de protección del personal sanitario y los escasos tests a enfermeros, médicos, técnicos y demás trabajadores hospitalarios. También se destacó la participación, entre otros, de referentes de los hospitales Álvarez, Piñero, Borda, Penna, Durand, Ramos Mejía donde surgieron varias iniciativas para seguir trabajando juntos.

A su vez, nos comprometimos a convocarnos a un nuevo conversatorio para el próximo viernes 24 de abril a las 20, ampliando las invitaciones, para organizarnos, acumular experiencias y seguir denunciando la exposición



de los trabajadores de la salud, exigiendo a los distintos gobiernos provinciales y nacional la solución a nuestros reclamos.

### NACIONAL

## ¡No a la rebaja salarial!

Escribe **Claudio Funes**

Las patronales de todos los sectores están jugadas a aprovechar esta crisis para forzar rebajas salariales. Empresas que pagan los sueldos "en cuotas", otras que abonan el 70 o incluso el 50%, o que aprovechan como excusa los rubros de presentismo, comisiones o "premios" para reducir lo efectivamente pagado.

De conjunto, las patronales pretenden avanzar con el planteo de que se produzca una rebaja salarial global de 30%. Ni que hablar de que no están dispuestos a cumplir con las cláusulas gatillos pendientes ni, mucho menos, a abrir las paritarias 2020. "Se evalúa no abrirlas hasta diciembre", dicen fuentes del propio ministerio de Trabajo. Los empresarios cuentan con la complicidad de la burocracia sindical de los gremios más importantes, que acuerdan dichas rebajas.

El lunes 20 el gobierno resolvió pagar el 50% de los salarios del sector privado. Se trata del denominado Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP). Se trata de un fenomenal subsidio al conjunto de las patronales. De hecho, con esta disposición del total de dinero que ha puesto hasta ahora el gobierno para la pandemia (aproximadamente 800.000 millones de pesos), más de la mitad son subsidios a los empresarios.

¿Será que, al menos, con este plata puesto por el gobierno, los empresarios van a pagar el 100% de los sueldos? ¡Ni siquiera así! Nuevamente, con la complicidad de las cúpulas burocráticas, se plantea "renegociar" el valor de la baja salarial, pero siempre aceptando el planteo patronal de que la crisis la terminemos pagando los trabajadores. Es que el propio programa ATP deja abierta la opción a que los acuerdos entre patronales y direcciones sindicales avalen las rebajas salariales. Terminará pasando lo mismo que ocurrió con el decreto de suspensiones y despidos.

Así, las burocracias de los sindicatos petroleros, mecánicos, mercantiles, metalúrgicos y otros negocian con los empresarios montos de rebajas salariales (además de suspensiones).

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, declaró que firmará un acuerdo que contempla suspensiones para alrededor de 20.000 trabajadores, que cobrarán un promedio de 50 % de sus ingresos habituales.

El Smata ya tenía acordado con las automotrices las suspensiones con el pago del 75% del salario habitual. Ahora, con el estado pagando el 50% de los salarios, dice que hay que rediscutir el monto pero insiste en que "se enfrenta una situación delicada y de salarios a la baja", como afirmó Ricardo Pignanelli, anticipando lo que viene.

Armando Cavalieri, secretario general de la federación de comercio (Faecys) que aglutina a 1,2 millones trabajadores, también está en plena negociación con planteos de rebajas salariales. Remarcadores de precios como Coto, Jumbo, Carrefour y Walmart, entre otros, agradecidos.

Producto de la bronca de la base que resiste la pobreza, en la UOM hay incertidumbre respecto de la continuidad de las negociaciones para recortar salarios. Todo después que la conducción de Antonio Caló ya había acordado una rebaja generalizada de 30% de la que tuvo que dar marcha atrás. La láctea Verónica, que integra uno de los sectores considerados esenciales y que produce con total normalidad,



es una expresión más de la voracidad patronal. Comunicó a sus trabajadores que el sueldo de marzo lo pagará en cuatro cuotas. Un verdadero abuso.

Si agregamos a las patronales de las cadenas de comidas rápidas el panorama se completa. Apenas comenzada la cuarentena pretendieron sacar ventaja reduciendo los salarios de los 25.000 empleados precarizados que ocupa el sector. Algo que sus trabajadores pudieron revertir.

La burocracia sindical continúa con su descarado apoyo a las patronales dejándolas hacer. En plena pandemia demuestra su desprecio por el pueblo trabajador y lo abandona a su suerte. Por eso luchamos, junto con los nuevos dirigentes que van surgiendo, por un modelo sindical combativo y democrático para sacar a la vieja burocracia sindical. Y, en estos momentos, peleamos contra las patronales y la burocracia para que no se aplique ninguna rebaja salarial, que se pague al 100% y en término. Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

## ¡Basta de despidos y suspensiones!

Escribe **Claudio Funes**

El decreto de necesidad y urgencia 329/2020 del 1º abril prohíbe los despidos sin causa, por fuerza mayor o disminución del trabajo.

Desde el momento que el "miserable" Paolo Rocca, con el consentimiento de la Uocra, decidió despedir a 1.450 trabajadores y el ministerio de Trabajo lo homologó, el decreto pasó a ser solo un papel mojado, ya que permite despedir por acuerdo entre las partes.

Estos despidos fueron emblemáticos. Comenzaba la ofensiva patronal para descargar la crisis del coronavirus sobre el pueblo trabajador. Al grito de guerra de Techint, al que Fernández se refirió como "tema superado", se sumaron la mayoría de las grandes patronales que comenzaron a despedir, junto con otras menores como el frigorífico Penta, Mirgor y Garbarino. En la provincia de



Catamarca despidieron a cuatrocientos trabajadores de la construcción mediante mensajes de texto a sus celulares. Los capitalistas pretenden que no se afecten en nada sus fabulosas ganancias en medio de la pandemia.

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre el 15 de marzo y el 15 de abril se relevaron 5.386 despidos, la gran mayoría luego de la firma del decreto presidencial.

La burocracia sindical, siempre haciendo juego de equipo con la patronal, ignora los despidos y repite, una y otra vez, que ante la crisis del coronavirus lo más importante es preservar el empleo. ¡Son unos auténticos canallas!

Con esta excusa (o extorsión a los trabajadores) negocian con las patronales flexibilización, suspensiones y rebajas salariales. A las suspensiones masivas en la industria automotriz, pactadas con el Smata, se suma-

## ... ¡Basta de despidos y suspensiones!

ron, en acuerdo con la UOM, las 10.000 suspensiones de Ternium-Siderar del Grupo Techint y las de Aluar en Puerto Madryn. La patronal de Acindar hace lo propio en su planta de La Tablada.

Con estos hechos consumados en su haber, los empresarios presionan al gobierno para salir de la cuarentena. La Cámara Argentina de Comercio y la Unión Industrial Argentina le hicieron conocer sus exigencias para volver a la normalidad económica y continuar lucrando. De esta puja nace lo que Fernández denomina “cuarentena administrada”, con algunas excepciones. Se sumaron (y se sumarán) actividades a partir del 13 de abril. Madanes Quintanilla fue uno de los

grandes ganadores: el dueño de Fate logró que la producción de neumáticos fuera considerada “esencial”.

La avidez de la patronal siempre cuenta con la vocación traidora de la burocracia sindical peronista: “Necesitamos oxígeno, no va más esto del aislamiento generalizado”. “Pedimos que se reactiven gradualmente ciertas actividades porque a nosotros nadie nos da garantías de que no habrá despidos y de que cobremos el sueldo”, hablan los burócratas como si todo eso ya no estuviese sucediendo ante su propia complicidad.

Las patronales están rompiendo la cuarentena, es un hecho. El dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero declaró que en el ferrocarril Sarmiento viajan un 34% más de personas que al

comienzo. Las consecuencias que esto podría acarrear a la salud del pueblo trabajador es responsabilidad del gobierno nacional, más allá de sus declaraciones de la importancia que tiene la cuarentena, que cede ante la embestida bicéfala de patrones y burócratas. Por esto el ministro de Trabajo de la Nación Claudio Moroni, expresó: “La administración de la cuarentena está en manos de las provincias”. Esto es lavarse las manos.

La cuarentena debe continuar, pero se debe terminar con las suspensiones y despidos y todos los trabajadores que fueron echados deben ser reincorporados. Toda empresa que suspenda, eche o cierre con la excusa de la crisis del coronavirus debe ser estatizada y puesta a funcionar bajo control de sus trabajadores.

## Techint: igual en Italia que acá



Escribe **Juan Carlos Giordano**, diputado nacional electo Izquierda Socialista /FIT Unidad

Techint fue noticia en el país por el despido de 1.450 trabajadores en plena pandemia. Ya en ese momento se conoció cómo estaba actuando esta patronal en Italia, donde se impidió, por presión de los empresarios, esencialmente Gianfelice y Paolo Rocca, del Grupo Techint, que se considerara zona roja a Lombardía, la región más devastada por el coronavirus. Recién se frenó la producción el 31 de marzo, cuando ya había 6.700 contagiados y tras semanas de campaña publicitaria de la agrupación empresaria Confindustria Bérgamo, que llenó los medios con el lema “Bérgamo no se cierra, Italia no se detiene”.

Ahora en Italia se está programando la fase 2 de la cuarentena para el 4 de mayo, pero las patronales del norte ya arrancaron la actividad rompiendo el aislamiento, mientras al principio no querían cerrar la producción en beneficio de sus ganancias capitalistas. Han reabierto sin permiso “65.000 empresas consideradas no esenciales” [...] El 71% de las grandes empresas con más de 250 empleados no han detenido sus actividades productivas, gran parte no respetando las normas de seguridad” (Clarín, 17/4).



Uno de los principales integrantes de la Confindustria lombarda es Tenaris, subsidiaria italiana del Grupo Techint. Al frente está Gianfelice Rocca quien, como sus parientes argentinos, es uno de los hombres más ricos de ese país y también dueño de una de las principales clínicas privadas de la zona de Bérgamo, donde colapsó la estructura sanitaria.

En todo el mundo los Rocca son iguales. “O ustedes aceptan cobrar el 40% del sueldo o cerramos”, le dijo un Ceo al Sindicato de Trabajadores de Ternium de Guatemala. En Colombia, la filial de Techint dice que pagará cero peso a sus trabajadores y les ofrece un préstamo a descontar de ingresos futuros. “Estamos pensando en encadenarnos frente a la fábrica”, anuncian desde el sindicato de Cartagena.

En Italia, donde el grupo de Paolo Rocca presionó en marzo para no cerrar la empresa pese a la pandemia, las actividades se están retomando aun cuando el virus sigue circulando. Allí la pelea de los trabajadores metalúrgicos es para que haya ves-

tuarios, comedores adaptados al distanciamiento, máscaras, guantes y uniformes que la patronal no provee. Meses antes fueron protagonistas de muchas huelgas por lo mismo.

Martín Ceballos, gerente de Tenaris para América Central, dijo: “Les adelanto que Paolo Rocca no va a perder un peso en esta situación. Si los trabajadores no aceptan reducir el 60% de los costos laborales,

lamentablemente el 40% tendrá que quedar en la calle”. Como dato curioso, cualquier controversia fuerte con sus trabajadores, como los convenios, se terminan definiendo en Luxemburgo, la sede legal del grupo.

“En Colombia, Canadá, Brasil, Argentina, Japón e Italia, el Grupo Rocca utiliza cualquier mecanismo en la legislación a su favor y realiza un poderoso lobby con los gobiernos, señaló el ex dirigente internacional de los metalúrgicos desde Canadá, Jorge García Orales, al que llaman Flower” (Página 12, 19/4/2020).

A estos empresarios hay que obligarlos a que no despidan ni reduzcan salarios bajo pena de que sus empresas sean estatizadas y puestas bajo control obrero e imponerles un impuesto especial de 10% a su riqueza personal y a las ganancias de su holding para afrontar con esos fondos la mayor crisis del coronavirus, como sostenemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad.

## Ferrovianos del Sarmiento: el sindicalismo combativo frenó la flexibilización

Escribe **Adolfo Santos**

El transporte público de pasajeros es uno de los sectores sociales más expuestos al contagio del coronavirus, tanto para los usuarios como para sus trabajadores. Sin embargo, las autoridades del gobierno y las patronales, junto a la burocracia sindical, intentan permanentemente romper la cuarentena ahora “administrada”, según el gobierno, con el propósito de que se vaya masivamente a trabajar. Sin considerar quiénes son los que realmente pueden garantizar los servicios esenciales y sin tener en cuenta todos los cuidados y prevenciones que este riesgo significa.

En el ferrocarril Sarmiento, por ejemplo, solo después de muchas denuncias y peleas dadas por los delegados sobre la falta de materiales para higiene, desinfección y protección del trabajador y que haya guardias mínimas que se necesitan para hacer funcionar el servicio sin romper la cuarentena, comenzaron a entregar los equipamientos necesarios, a higienizar las estaciones y formaciones y a autorizar a cumplir con la cuarentena a los mayores de 60 años y a quienes padecen enfermedades y situaciones contempladas en el decreto de aislamiento. Además se hicieron las distintas guardias que se requieren en cada uno de los servicios. Es un avance en la pelea que se sigue dando cotidianamente para que la patronal no viole lo acordado.



Estos logros que se vienen conquistando son fruto de la pelea del combativo cuerpo de delegados junto a los ferroviarios. Sin embargo, Trenes Argentinos, con su presidente, Martín Marinucci, a la cabeza, intentó flexibilizar a los ferroviarios y colocar la culpa de los problemas que ofrece el servicio en la conducción de los delegados. La semana pasada, frente a la bronca e indignación que generaron las fotos que divulgaron los representantes sindicales, donde se ve cómo viajaban los trabajadores hacinados y sin respetar el protocolo de distanciamiento en el ferrocarril, Marinucci declaró que era culpa de “los sindicalistas conducidos por Sobrero, que ponen palos en la rueda”. Para demostrar

la responsabilidad de Sobrero en la reducción de los servicios, Marinucci declaró en todos los medios que el dirigente del Sarmiento “no aceptaba aumentar la jornada de trabajo de los guardas a ocho horas como ya lo había acordado con Sergio Sasia, secretario general de la Unión Ferroviaria”, desnudando la nueva entrega de la Verde.

“Los trabajadores estamos dispuestos a hacer funcionar el servicio, es lo que venimos haciendo responsablemente, lo que no aceptamos es una flexibilización laboral encubierta aprovechando la cuarentena”, respondió inmediatamente Sobrero, desenmascarando la maniobra de la patronal con la burocracia. Mientras Sasia y la Verde aceptaban esa propuesta vergonzosa, la conducción Bordo del Sarmiento llamó a rechazar esa negociación mediante una votación en urna. El resultado: 100 de los 130 guardas presentes dijeron ¡no! a la flexibilización acordada entre la patronal y la burocracia. Ante la firmeza de los trabajadores, la patronal tuvo que retroceder y la burocracia, ante la indignación de su propia base, ahora tendrá que dar explicaciones sobre ese nefasto acuerdo.

El sindicalismo combativo no acepta flexibilizar derechos en nombre de la emergencia. Ni rebajas salariales, ni suspensiones, ni despidos, ni aumento de la carga de trabajo para garantizar las ganancias de la patronal, como estamos viendo en la Uocra, en petroleros, en el Smata, en la UOM y ahora pretenden hacerlo

### ... Ferroviarios del Sarmiento:

en ferroviarios. Para tener trenes funcionando de acuerdo con el protocolo, el gobierno también debe resolver los problemas económicos de los trabajadores que necesitan todos los días llevar el sustento a sus casas y todavía no han recibido ayuda. Así se conseguiría reducir el número de pasajeros. Además, Marinucci y los distintos estamentos de la empresa deberían poner en práctica las propuestas de los delegados combativos para que circulen más

trenes en vez de intentar romper la cuarentena flexibilizando a los ferroviarios.

Nos oponemos a que quieran descargar la crisis en las espaldas de los trabajadores. Repudiamos a los dirigentes sindicales burocráticos que llegan a acuerdos con la patronal para reducir salarios y derechos y que no consultan a las bases. Vamos a continuar luchando y sumando para el campo del sindicalismo

combativo a los nuevos dirigentes que surgen de esas luchas. Necesitamos construir un sindicalismo combativo, democrático, que actúe de forma independiente frente al gobierno y a los patrones. Durante la cuarentena, y pasada la pandemia, los problemas se habrán multiplicado. Por eso más que nunca necesitamos una nueva dirección que esté a la altura de las necesidades de los trabajadores.

## DEUDA EXTERNA

### ¿Qué va a pasar con la negociación de la deuda?

Escribe **José Castillo**

El gobierno de Alberto Fernández presentó la semana pasada su propuesta de renegociación de la deuda externa para los bonos en dólares y euros bajo legislación extranjera. Antes de la explicación técnica del ministro Guzmán hubo una serie de afirmaciones políticas del presidente, que habló flanqueado por su vice, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Alberto Fernández enfatizó que “no se puede pagar en este momento”. Esto, sin duda, ha sido visto por muchos con simpatía y esperanza. Lo observamos charlando con compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, amigos y familiares. Y es lógico que lo sea, efectivamente, y lo venimos diciendo desde hace muchísimo, la deuda es impagable, y hoy, donde necesitamos hasta el último centavo para salvar vidas ante la pandemia del coronavirus, destinar ese dinero a los pulpos acreedores es un auténtico crimen.

Los economistas y periodistas oficialistas han insistido en que la propuesta presentada por el gobierno es “durísima” ante los acreedores y que está planteada en términos de “tómelo o déjelo”, por lo que no habrá ningún retroceso.

Lamentablemente no es así. Veámoslo detenidamente: se plantea una reducción del capital de la deuda a renegociar de 5,4% (3.600 millones de dólares). Apenas una semana antes, los trascendidos eran que la quita de capital no iba a ser menor a 15%, pero a último momento se la redujo a fines de dar una señal “negociadora” a los acreedores.

La quita de intereses sí es importante (62%), aunque partiendo de tasas de interés astronómicas, las más altas del mundo. La propuesta planea canjearlas por otras que, en promedio, serán de 2,33% anuales en dólares. Seguirán siendo altísimas, ya que las tasas internacionales mundiales están casi todas entre 0% y 0,5 por ciento.

El gobierno propone un período de gracia (tiempo durante el cual no se paga nada) de tres años (2020, 2021 y 2022). En todos los discursos previos se hablaba de “cuatro años”, y ahora aparecen tres. Nuevamente, como guiño a la negociación con los acreedores.

Muchas preguntas quedan sin responder. ¿Durante los tres años que no se paga nada se acumulan los intereses y entonces

eso multiplica la deuda? ¿Habrá, además, algún cupón o pago extra, como deslizó algún funcionario del gobierno, que se pagará cada vez que el país crezca (parecido al actual “cupón PBI”)? ¿Se realizará algún pago en efectivo inicial para “endulzar”, como se dice, a los acreedores? Y, sobre todo, ¿el gobierno está dispuesto a “mejorarles” la oferta a los pulpos pagándole más de intereses o de capital, o acortando los plazos?

Se trata, en definitiva, de la pregunta de si esta es, de verdad, la propuesta “última del gobierno” o apenas un primer planteo para luego ceder en las negociaciones, como todo parece indicar.

“Gobierno presentó oferta. Bonistas la rechazan. Empieza el póker mentiroso”

Así tituló *Ámbito Financiero* el 21/4. El editorialista, Carlos Burgueño, agregó: “El primer mentiroso son los bonistas, que aseguran que de ninguna manera aceptarán la oferta. El segundo es el propio gobierno, que afirma que la propuesta es inmejorable”.

Es que, apenas se dio a conocer la propuesta, sucedieron dos cosas contradictorias: por un lado, los grandes pulpos que concentran a la mayor parte de los bonos (Greylock Capital, Blackrock, Fidelity, Ashmore, Pimco, Alliance Bernstein) rechazaron de plano la oferta. Pero al mismo tiempo, el riesgo país (que marca la probabilidad de que la Argentina entre en cesación de pagos) bajó de 4.000 a 3.400 puntos y los precios de los bonos, que estaban por el piso, subieron 10 por ciento. Esto último expresa lo que dijeron muchos consultores del establishment, la propuesta del gobierno fue más “suave” de lo que se esperaba. Y hay muchísimos “guiños” por debajo de la mesa de que se puede “mejorar” mucho más. O sea, que los pulpos acreedores, si aprietan, tienen reales condiciones de terminar cobrando más y antes. Por eso se habla de una partida de póker: el gobierno “se hace el duro” pero está dispuesto a ceder; los pulpos acreedores “se hacen los enojados” porque saben que así van a obtener más.

Como sea, lo que sí es un hecho es que este “canje” de bonos será con una quita mucho menor que la que hicieron Kirchner y Lavagna en 2005. Recordemos que, en ese momento, se nos vendió que el problema de la deuda “ya estaba resuelto” y que “nos habíamos desendeudado”, lo que luego se probó rotundamente falso.

#### ¿Se soluciona con esto el problema de la deuda?

No sabemos cómo va a terminar este capítulo de la deuda.



El gobierno se vio obligado a ir a esta renegociación porque, efectivamente, no tiene el dinero para cumplir con todos los vencimientos. Pero su política no es romper y no pagar, sino todo lo contrario. Advertimos entonces que, más allá de los discursos, está dispuesto a seguir cediendo frente a los acreedores. Y cada cosa que se cede son millones de dólares menos para resolver la urgencia de la pandemia y las necesidades populares.

Aclaremos también que con esto ni siquiera se despeja el total de los vencimientos de deuda de corto plazo. Todavía quedará pendiente la negociación con el FMI por los 49.000 millones de dólares que se le deben. Y un sinfín de vencimientos de otros bonos, con legislación local, o de las provincias, que no entraron en esta negociación.

Entendemos que haya muchísimos compañeros que recibieron con expectativa lo que dijo el presidente Fernández. Coincidimos en que vean con buenos ojos el planteo de que la plata ante la emergencia debe ir para salud o resolver la crisis social, y no para los pulpos acreedores. Pero, lamentablemente, tenemos que advertir que estamos ante un nuevo proceso de “renegociación” de los muchos que ya vimos en años anteriores. Y que, al final, lo que termina pasando es que la deuda externa sigue creciendo y cada vez terminamos pagando más.

Por eso tenemos que insistir en lo que siempre sostuvimos desde la izquierda: no hay salida sin declarar el no pago de la deuda. Estamos ante una oportunidad inmejorable para, debido a la emergencia, dejar efectivamente de pagarle, tanto a los pulpos acreedores privados como también al FMI, que vendrá por “sus” 49.000 millones de dólares. La deuda es no solo ilegal, sino inmensamente inmoral, más aún en estos tiempos de pandemia.

### La bola de nieve imparable de la deuda

Escribe **José Castillo**

El gobierno de Fernández presenta la renegociación actualmente en curso con los pulpos acreedores como la que, si resulta exitosa, resuelve “definitivamente” el problema de la deuda externa argentina. Lamentablemente, esto no es así.

La propuesta de renegociación presentada la semana pasada por el ministro Guzmán es solo por la porción de deuda en dólares bajo legislación extranjera, que suma un total de 66.238 millones de dólares. Esto es el 20% de toda la deuda del Estado nacional. Y si agregamos a ello las deudas de las provincias y la del Banco Central de la República Argentina, menos de 15 por ciento.

Veamos. Culminado este proceso de “renegociación” (y cualquiera sea el resultado que se obtenga), inmediatamente nuestro país tendrá que hacer frente a otros 49.000 millones de dólares que, entre capital e intereses, supuestamente le “debemos” al FMI. Se trata del famoso préstamo tomado por Macri y que, como ya está archidemostrado, se utilizó en su totalidad para que la fuga de divisas al exterior. Como ya “aviso” el propio Fondo, esa deuda no admite ningún tipo de quita.

Pero no es esta la única deuda con organismos internacionales, también le debemos 7.400 millones de dólares al Banco

Mundial, 12.506 millones al BID y 3.547 a la Corporación Andina de Fomento. Y, por si todo esto fuera poco, tenemos una cuota pendiente de una vieja deuda generada directamente en la época de la dictadura con el Club de París por 2.100 millones de dólares (que, dicho sea de paso, es fruto de una renegociación realizada en 2012 por el entonces ministro de Cristina Kirchner, Axel Kicillof).

Pero ahí apenas si llegamos a la mitad de nuestro endeudamiento. Tenemos todavía que sumar 182.044 millones de dólares en bonos (algunos en dólares y otros en pesos), bajo “legislación local”. La mayoría de ellos en manos de los mismos buitres extranjeros que los que están bajo legislación extranjera. Una parte importante ha sido “reperfilada” hasta fin de año, pero a partir de diciembre empiezan a caer sus vencimientos.

Y a todo esto hay que sumarle la deuda del Banco Central, que asciende a 1.3 billones de pesos en Leliq, de vencimiento de cortísimo plazo (20.000 millones de dólares). Y, como ya mencionamos, tenemos también que sumar lo que se llama la deuda “sub-soberana”, que es la que tienen las provincias, por más de 20.000 millones de dólares. Si a todo esto le agregamos otros pagos ya comprometidos, pero que por cuestiones contables no figuran aún en el stock informado por el gobierno (como los cupones PBI, que la Argentina se compromete a seguir abonando



cada vez que el país crezca más de 3,25% hasta acumular pagos por 16.000 millones de dólares aún pendientes) y los juicios con sentencia ante el Ciadi (que ningún gobierno ha denunciado, y por lo tanto se van acumulando como deuda), terminamos debiendo más de 400.000 millones de dólares. ¡Total y absolutamente impagable desde cualquier punto de vista que se lo mire!

La negociación en curso, entonces, no resuelve en absoluto siquiera los problemas de corto plazo de nuestro país. Hay que dejar de pagar toda la deuda y volcar cada uno de esos recursos a resolver las más urgentes necesidades populares que la pandemia del coronavirus ha puesto más que nunca sobre la mesa.

# Basta de dilaciones con el impuesto a las grandes riquezas

Escribe **Guillermo Sánchez Porta**

El coronavirus está generando una enorme crisis social y económica en todo el mundo. Muchos hablan de las graves consecuencias que vendrán “cuando se supere el coronavirus”. Es cierto. Pero ahora lo más importante es ver las angustias sociales que está trayendo hoy para millones. Y cómo las resolvemos ahora, no cuando “pase el pico”.

Hace falta muchísimo más dinero del que el gobierno está invirtiendo. Millones pasan hambre y no pueden salir a buscar changas. Los empresarios suspenden o despiden y rebajan más los ya magros salarios y hay millones que no están cobrando nada. La comida que se reparte a los sectores más empobrecidos es poca y no alcanza a todos los que la necesitan. Los subsidios anunciados, además de insuficientes, no han llegado todavía a millones. Los jubilados sufren aún más la enorme crisis que venían acarreado por los ajustes gubernamentales. ¡Es urgente resolver esta situación!

Pero la respuesta del gobierno es que hay que “administrar la cuarentena”. Es decir, reabrir amplios sectores de la economía para que las grandes patronales no pierdan parte de las enormes ganancias que vinieron amasando en estos años bajo el argumento de que así la gente puede conseguir unos pesos. Por eso es que Fernández dice que “prefiere que haya un 10% más de pobres a que haya miles de muertos”. El problema es que con esta política no solo habrá bastante más de un 10% de pobres, sino que con la “cuarentena administrada” se corre el riesgo de miles de contagios nuevos.



Nosotros proponemos lo opuesto, que no haya miles de contagios y muertes y que la crisis la paguen los grandes empresarios, las multinacionales y los banqueros, y que no se pague un peso de deuda externa.

Por eso, desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad planteamos que hay que imponer ya un impuesto especial de 10% a los cincuenta principales multimillonarios de la Argentina y de 10% de las ganancias a los veinte grupos económicos más grandes. A esto hay que sumarle lo que se obtendría de dejar de pagar inmediatamente la deuda externa. Nosotros proponemos que todo ese dinero se destine a un fondo de emergencia. Con eso duplicaremos lo que el gobierno destinó a esta crisis. Somos concretos, con apenas 250 millones de dólares se podrían contratar 2.500 trabajadores de la

salud que faltan en la provincia de Buenos Aires. Comprar 25.000 respiradores, ocho millones de barbijos especiales y los insumos para los hospitales, incluyendo la instalación completa de nuevos hospitales y unidades de terapia intensiva. Se podrían mejorar los salarios de los trabajadores de la salud, triplicar los subsidios de 10.000 pesos y distribuir alimentos para que nadie pase necesidades.

El gobierno, desde hace un par de semanas, viene anunciando la presentación de un proyecto de impuesto a las grandes riquezas. Primero lo denominaron “Impuesto Patria”, patrocinado por Máximo Kirchner. Luego pasaron a “conciliar” distintas iniciativas, coordinados por Carlos Heller. Se habla de un impuesto de 2% a 3% a quienes tengan un patrimonio mayor a 3 millones de dólares. Con eso calculan recaudar unos 3.000 millones de dólares.

Nosotros consideramos que hace falta más. Pero nos preocupan las dilaciones. El proyecto da vueltas pero no avanza. Ahora el gobierno le está “solicitando a la Corte Suprema” un permiso para que sesionen Diputados y Senado de manera virtual. ¡A este ritmo van a tratar ese impuesto cuando sea muy tarde!

Exigimos que el gobierno imponga ya mismo un impuesto a las grandes fortunas. Del mismo modo, ya que el propio Alberto Fernández dice que hoy es impagable, que se suspenda inmediatamente todo pago de deuda externa. Así la crisis no la seguiríamos pagando los trabajadores y el pueblo, se mantendrían los puestos de trabajo, no habría rebaja salarial y tendríamos los fondos para enfrentar las necesidades sanitarias. Esa es la manera de encarar hoy la crisis del coronavirus.

## El Frente de Izquierda-Unidad presentó su proyecto de impuesto a la riqueza

Escribe **Claudio Funes**

Apoyamos y hacemos nuestro el proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional por los diputados Nicolás del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO) en nombre del Frente de Izquierda Unidad para gravar la riqueza y recaudar así 20.000 millones de dólares para constituir un fondo de emergencia ante esta pandemia.

El proyecto presentado por los diputados del Frente de Izquierda Unidad es la primera iniciativa parlamentaria que exige la implementación de impuestos progresivos para gravar a millonarios, bancos, multinacionales, grandes empresarios y terratenientes con el fin de reunir los fondos necesarios para combatir de verdad la crisis que produce el coronavirus.

A continuación resaltamos parte de su articulado.

El artículo 1° establece: “Impuesto extraordinario a los grandes patrimonios aplicable a las personas humanas y sucesiones indivisas cuyo patrimonio total supere el valor de

100.000.000 de pesos”. El artículo 3° dispone un “impuesto a las ganancias bancarias aplicable por única vez a los beneficios de las entidades financieras y bancarias del sector privado”. El artículo 4° impone un “impuesto extraordinario a las altas rentas”. El artículo 7° lo hace con el “Impuesto Especial a la Gran Propiedad de la Tierra”. El artículo 8° grava la vivienda ociosa.

Además, se establece la creación de un “comité de control, monitoreo y seguimiento del fondo especial de emergencia” integrado por trabajadores electos por sus pares de salud, técnicos de universidades públicas, trabajadores del Instituto Nacional de la Vivienda, entre otros. A su vez, señala que se suma a los proyectos ya presentados por el FIT Unidad que plantean el no pago de la deuda externa.

Desde Izquierda Socialista consideramos que con dicho fondo de emergencia, sobre la base de un impuesto a los gran-



des empresarios y multinacionales y el no pago de la deuda externa, se reunirán los recursos necesarios para invertir en salud pública y alimentos, incrementar los programas sociales para los más necesitados y todo lo que sea necesario para terminar con la dramática situación de millones de trabajadores y sectores populares. Así se hará realidad lo que venimos sosteniendo desde el primer día, que la crisis del coronavirus la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

## LOS ABUSOS DE LOS FORMADORES DE PRECIOS Y LOS BANCOS

### El virus de la inflación

Escribe **Adolfo Santos**

En esta cuarentena la inflación se ha convertido en un nuevo enemigo a ser enfrentado. Con salarios prácticamente congelados, familias enteras recibiendo un salario mínimo y otras dependiendo de ayudas del gobierno que muchas veces ni llegan, el aumento de precios de los productos básicos se hace insostenible.

En marzo la inflación fue de 3,3%, llegando a 7,8% en el trimestre y acumulando 48,8% con respecto a marzo del año pasado. Son datos oficiales, aunque todos sabemos, cuando llegamos a las góndolas, que la realidad es mucho más grave. En los dos primeros meses del año el gobierno hacía alarde de que la inflación venía “a la baja” (frente a los números astronómicos del año anterior con el gobierno de Macri). Igualmente, los artículos de primera necesidad,



aun en ese entonces, siguieron subiendo. Pero ahora el incremento se aceleró con todo, hay analistas que ya anuncian un índice cercano a 60% para este año. Una verdadera bomba de relojería.

¿Por qué se desboca la inflación justo en medio de la cuarentena? Más allá de explicaciones técnicas de los economistas del *establishment* (todas ellas falsas, ya que

aluden a la relación entre la emisión monetaria con “la oferta y la demanda”), la explicación es mucho más terrenal: los grandes grupos monopólicos de la alimentación (Arcor, Molinos, empresas lácteas como Danone o La Serenísima), de productos de limpieza o tocador (Procter&Gamble, Unilever), de agua y bebidas (Coca, Pepsi) junto con las cadenas de hipermercados (Carrefour, Coto, Día, La Anónima) aumentan abusivamente y a su voluntad los precios. Hasta ahora el gobierno no ha actuado con el rigor necesario para proteger a los consumidores y castigar a los inescrupulosos.

Es inadmisibles que en medio de esta grave crisis los empresarios se aprovechen para aumentar sus ganancias. El gobierno debe de inmediato castigar

con la ley de Abastecimiento ejemplarmente a los que no respetan los precios máximos establecidos y divulgando sus nombres para que todos sepan quiénes realmente provocan la inflación. Hay que establecer mecanismos de fuertes multas, clausuras y confiscar las mercaderías de los que violen los precios máximos establecidos, distribuyendo esos productos de forma gratuita a los sectores más necesitados.

## ¡Basta de abusos y estafas de los bancos!

Escribe **José Castillo**

Los bancos privados que operan en el país vienen siendo los privilegiados de siempre. “Se la llevan en pala”, llegó a decir la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una frase célebre. Es que ganan siempre, haya o no crisis, la economía crezca o se hunda. El año pasado, por citar solo un ejemplo, las ganancias de los bancos en conjunto se duplicaron con respecto al año anterior mientras la economía se hundía, crecían la pobreza, los despidos y la inflación. Así, el banco Galicia reportaba ganancias por 42.515 millones de pesos, Macro 40.800, Patagonia 18.211 y Supervielle 4.261 millones. Y hasta acá estamos hablando de los bancos con dueños argentinos, Eduardo Escasany (Galicia), Jorge Brito (Macro), Julio Patricio Supervielle (Supervielle), Stuart Milne y González Moreno (Patagonia, aunque cedieron parte de la propiedad al Banco do Brasil). A ellos hay que sumarle los bancos extranjeros que operan (y esquilman) al pueblo trabajador argentino: los españoles Santander y BBVA-Francés, el chino ICBC, el británico-chino HSBC y el norteamericano Citibank (que si bien vendió su banca minorista al Santander sigue operando para empresas), que no informan sus superganancias en nuestro país.

Todos ellos cometen los mil y un abusos. Cobran tasas abusivas por financiar las tarjetas de crédito (con un costo financiero total que llega a 120%), le descuentan los cheques



o le cobran por descubierto al trabajador independiente, al remisero o al quiosquero con tasas también astronómicas. Y siguen sin otorgar los créditos a los que, supuestamente según el gobierno, están obligados. La excusa es pedirle al pequeño ahorrista los mil y un requisitos hasta hacerle imposible el acceso a ese beneficio. Los miles de millones de pesos que el Banco Central les “liberó” en medio de la pandemia a los bancos para que los utilicen en esos préstamos, o bien se los están otorgando con exclusividad a su clientela de grandes empresas, o bien directamente los están utilizando ellos mismos para operaciones de compra de dólares en los

mercados exclusivos (los llamados MEP o contado con liqui), provocando en estas últimas semanas que el valor de la divisa pase los 100 pesos.

Y como se visualizó en las semanas anteriores, la inmensa mayoría de los bancos privados, entre ellos todos los extranjeros, se niegan absolutamente a cumplir rol social alguno con algo tan básico como pagar jubilaciones o asignaciones universales. Los bancos estatales (Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires) terminan siendo los que las pagan en todas sus sucursales, los que están presentes en barrios o pueblos donde muchas veces son la única ventanilla para cobrar algo o el único cajero automático y los únicos que cumplen en otorgar los créditos que tanto se anuncian rimbombantemente.

Por eso, en esta emergencia, los bancos privados (nacionales y extranjeros) deben estar, sin duda, entre aquellas empresas que deben pagar un impuesto especial de 10% de sus ganancias (por sobre lo que tributan habitualmente).

Porque esta coyuntura pone una vez más a la vista los privilegios que vienen gozando desde la época de la dictadura militar. Vergonzosamente, la actividad sigue regida por la Ley de Entidades Financieras dictada por Martínez de Hoz y Videla en 1977, no derogada por ninguno de los gobiernos posteriores. Terminar con esta legislación, nacionalizando la banca, es lo que desde siempre venimos proponiendo desde la izquierda, para que así el conjunto del ahorro popular pueda volcarse a resolver las más urgentes necesidades de salario, trabajo, educación, salud y vivienda.

## FALTA DE ALIMENTOS Y POBREZA

### Sigue aumentando la pobreza

Escribe **Diego Martínez**

La pobreza sigue creciendo en el país a un ritmo alarmante. No se trata de un fenómeno nuevo. Durante 2019 se sumaron 2,2 millones de pobres (datos Indec). El crecimiento se siguió manifestando durante el primer trimestre de 2020, tras la asunción de Alberto Fernández a la presidencia. Es la expresión de las políticas de ajuste, los pagos al FMI y los beneficios a las grandes empresas que vienen aplicando los sucesivos gobiernos en detrimento del bienestar de los trabajadores y los sectores populares.

#### Nuevos pobres

Los datos oficiales de diciembre de 2019 dicen que en la Argentina hay 35,5% de pobreza, pero ese dato quedó totalmente desactualizado. Desde que se desató la crisis del coronavirus se calcula que entre 4 y 5 millones de trabajadores que están en negro o haciendo changas dejaron de percibir ingresos (datos Clarín, 19/4/2020). Muchos se encuentran en situación de pobreza y varios en situación de indigencia. Por primera vez en su vida piden la ayuda del Estado para poder subsistir. Además, muchas de las personas que venían recibiendo planes sociales complementaban sus ingresos con changas o algún emprendimiento familiar, que ahora no pueden realizar. Los “viejos” pobres están a su vez más empobrecidos. Para paliar esta situación el gobierno dispuso de un bono de 10.000 pesos a cobrar por única vez que resulta totalmente insuficiente para una familia y que muchos cobrarán recién

después del 5 de mayo. De los 12 millones que se inscribieron para recibir el ingreso familiar de emergencia (IFE), 4 millones fueron rechazados, la gran mayoría de ellos por problemas burocráticos, quedando totalmente a la deriva. Aunque es un monto insuficiente, nosotros reclamamos que sea de 30.000 pesos, hay que otorgárselo a todo aquel que lo necesite.

#### Comida para todos y todas

La situación en los barrios es alarmante. El principal drama es la falta de comida. La asistencia alimentaria que dan el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipios es totalmente insuficiente. En los municipios ya no responden a nuevas solicitudes de comida, las organizaciones sociales denuncian que reciben menos alimentos que los que les corresponden, las escuelas reciben bolsones en una cantidad mucho menor que su matrícula y en varias provincias no se deposita el dinero correspondiente en la tarjeta alimentaria. Los que tienen la suerte de recibir un bolsón obtienen muy pocos artículos que a los dos o tres días se acaban. Frente a esta situación muchos vecinos en los barrios deciden solidariamente dar de comer en sus casas, poniéndose en riesgo de contagio al hacerlo sin los elementos y las condiciones de protección correspondientes. Lamentable. Es el gobierno nacional el que tiene que asegurar la comida para todos los que la necesiten.

Para garantizar la comida en todos los barrios del país y un verdadero ingreso familiar de emergencia que se cobre



mensualmente, que lo cobre cada miembro del matrimonio, y no solo uno de ellos, y que alcance la suma de 30.000 pesos, es necesario implementar un fondo de emergencia de forma inmediata. Hay que utilizar los 4.500 millones de dólares que están predestinados al pago de deuda externa a estos fines, así como también aplicar un impuesto a los grandes empresarios y a las multinacionales, como propone el proyecto de ley del Frente de Izquierda Unidad ¡Que la crisis la paguen los ricos, las grandes empresas y los bancos, no los trabajadores y el pueblo!

## Tucumán: Manzur ¿“cuidemos a los que cuidan”?

Escribe **Doris Mansilla**

En el Ministerio de Desarrollo Social se viene peleando por salarios y pase a planta luego de meses de no cobrar (algunos casos desde julio de 2019) y pérdida de empleo activo por cierre de programas en un vaciamiento del servicio esencial que prestan estos trabajadores que están en la primera línea, batallando sin recursos institucionales y de protección personal y de seguridad con el sector más golpeado de la sociedad. La función que lleva a cabo este ministerio es esencial, trabaja directamente con la pobreza y sus problemáticas y necesita de políticas públicas eficaces y presupuesto.

La provincia no se queda atrás en el doble discurso. El descaro del ministro de Desarrollo Social, Yedlin, de



lanzar un programa “solidario” de cuidado familiar de emergencia para que más de ochenta pequeños de hasta 5 años puedan ser alojados “en viviendas dignas” es muestra de ello. ¿Y los hogares de la provincia, ministro Yedlin? ¿O será que el vaciamiento y la falta de pago del personal los transformó en “no dignos”? El gobierno de Manzur hace de las políticas una puesta en escena digna de Cien años de soledad, desfinanciando los sectores más sensibles, salud y desarrollo social, y reforzando el aparato represivo.

Los conducciones de los gremios callan y dejan correr y actúan solo ante cualquier atisbo de organización. En eso están ATE y UPCN por igual. Desde Izquierda Socialista llamamos a organizarnos desde abajo para frenar este ajuste brutal.



## Algunas polémicas por el rol del sindicalismo docente: mantengamos un sindicalismo combativo

*Aunque la pandemia es un hecho novedoso, que nos obliga a dar respuestas a situaciones inéditas por la gravedad sanitaria que vivimos, estas las debemos elaborar en el marco de los mismos criterios sindicales con los que nos manejábamos antes. Porque el rol del imperialismo, las patronales, el gobierno y la burocracia sindical, no ha cambiado. Hay agrupaciones político-sindicales docentes que, frente al coronavirus, se confunden y pierden estos criterios, presionados por un lado por el sano sentimiento de solidaridad social con el que la docencia en general y la izquierda en particular siempre nos hemos movido. Pero, por otro, terminan cediendo al "voluntariado" al que apelan el gobierno y la burocracia. No han advertido las maniobras que los diferentes gobiernos han implementado contra la docencia y la educación pública.*

Escribe **Guillermo Sánchez Porta** | Coordinador nacional de Docentes en Marcha



Como sindicalismo docente combativo debemos defender el salario, los derechos laborales y la escuela pública, denunciando a los gobiernos provinciales y nacional y sus permanentes ataques. Es esencial defender el pago del 100% del salario a todos los docentes, rechazar los acuerdos a la baja firmados por las burocracias. Exigir la reactualización mensual según el costo de la canasta familiar. Que no quede ningún docente sin cobrar y se garanticen los ofrecimientos y actos públicos para tomar los cargos vacantes y suplencias, que el gobierno suspendió. Y, mientras se realizan de manera virtual, que paguen el salario que estaba cobrando cada docente al finalizar 2019 o, al menos, 40.000 pesos mensuales.

Mientras la burocracia actúa de correa de transmisión de la política del gobierno, apoyando sus medidas, nosotros denunciaremos el ataque a los derechos laborales, las clases virtuales sin infraestructura tecnológica y habitacional de muchísimos docentes, sin centralidad pedagógica, la súper explotación laboral de no tener horarios para responder correos electrónicos y/o mensajes de alumnos y familias. Sufrir aprietos que exijan informes de nuestros trabajos, cantidad de alumnos conectados, evaluaciones y calificaciones, entre otros.

Producto de las fuertes y sólidas denuncias, de los sindicatos combativos (Ademys, Amsafe Rosario, Suteba multicolores) es que Trotta tuvo que desdecirse, admitiendo que este sistema no puede reemplazar a la educación presencial ni al rol del docente en el aula. Que no serán necesarias las calificaciones virtuales, ni se perderá el ciclo lectivo 2020. Que están implementando un sistema de textos en papel para que llegue a los alumnos. Por supuesto, a las palabras del gobierno se las lleva el viento y será una dura pelea lograr que sostenga esas posturas y archiven sus proyectos de reemplazar docentes por "facilitadores virtuales".

### Defendemos la escuela pública estatal, contra su privatización

Estamos por la defensa de la escuela pública, denunciando que no sigan avanzando los planes del imperialismo, del Banco Mundial, que buscan liquidar el derecho social a una educación pública, gratuita, estatal. Buscan convertir a la educación en una mercancía más, privatizando todo el sistema educativo. Quieren que estudien los que paguen y

los pobres vayan a una escuela estatal convertida en "centros de alfabetización, comida y contención social".

En las últimas décadas los gobiernos avanzaron en esos planes del Banco Mundial gracias a las traiciones de la burocracia, pese a las grandes luchas de la docencia. Lograron la transferencia de las escuelas a las provincias, atomizando el sistema educativo nacional y los salarios docentes. O el pulular de escuelas privadas, la privatización de servicios y de cursos de formación, mientras destruyen la formación continua estatal o la infraestructura de la escuela pública. Lamentablemente también, bajo el eufemismo de "integración" o "inclusión", han avanzado en arrasar con la educación de adultos, las escuelas especiales o con los roles del docente. En este aspecto la "inclusión" y las escuelas de jornada extendidas, sin fondos, sin más personal, sin infraestructura, lleva a que tanto la dirección de las escuelas como los docentes debamos cumplir tareas de alimentación y contención social, además de pedagógicas.

La solución para esto es una fuerte inversión en el presupuesto de educación y salud, ya. Por eso no perdemos de vista la exigencia al gobierno nacional y a los gobernadores, que dejen de pagar la deuda externa, que quiten todos los subsidios a las escuelas privadas y se implemente un Fondo de Emergencia con un impuesto del 10% a las grandes fortunas, banqueros, multinacionales y empresarios.

### ¿Comedores, voluntariados, asistencialismo? El rol docente y del sindicalismo combativo

Como hemos dicho miles de veces, la escuela pública es una caja de resonancia de la crisis social. Ningún docente es ajeno a los graves problemas que viven nuestros alumnos. Y permanentemente estamos actuando en la escuela para que el gobierno las resuelva, muchas veces haciéndonos cargo nosotros, solidariamente.

Pero el proyecto del Banco Mundial que la escuela pública deje de ser un pilar en la "movilidad social" para convertirse en "contención social", se fue naturalizando. Por eso, una de las tareas centrales del sindicalismo combativo es denunciar estos planes y enfrentarlos, exigiendo la renacionalización del sistema educativo y su financiamiento, terminar con la educación privada y rechazar el rol del docente "asistencialista", reclamando la formación pedagógica continua y tareas educativas claras. Ceder en estos reclamos,

frente a un "posibilismo" y "costumbrismo" de tareas que no corresponden, es capitular a la política del gobierno.

Hay agrupaciones docentes, como la Gris del Nuevo Mas, la Marrón del PTS y otras, que desde el inicio han menospreciado la validez sanitaria de la cuarentena. En vez de centrar su política en exigir a los gobiernos que inviertan todo lo necesario en garantizar la alimentación, el reparto de bolsones casa por casa, insumos de higiene y seguridad, textos, etc., tienen la política de organizar voluntariados para repartir bolsones de comida en las escuelas (¡como si esa fuera una tarea de la docencia!). Esta política "asistencialista" se apoya en que muchos docentes se sienten angustiados por la situación social de las familias de nuestras escuelas. Por supuesto que compartimos y acompañamos esa sana intención solidaria de nuestros compañeros de escuela, con la que muchísimas veces hemos realizado actividades en medio de inundaciones o desgracias. Pero que una agrupación político-sindical combativa impulse ahora la ruptura de la cuarentena sanitaria a docentes y a los sectores socialmente más vulnerables, nos parece una irresponsabilidad. Repiten este criterio sindical "asistencialista" cuando reclaman a los sindicatos combativos que se encarguen de entregar bolsones o ayudas a docentes que no cobran, cuando el rol del sindicalismo combativo debe ser obligar al gobierno que les pague. ¿Estas agrupaciones propondrán voluntariados para recolectar la basura o colocar inyecciones, donde el gobierno no garantice la plata para recolectores o trabajadores de la salud? Así está actuando la burocracia sindical con sus iniciativas, como ofrecer lugares para los que se enfermen, en vez de enfrentar a las patronales y gobiernos que descuentan salarios, despiden y no ponen más plata para la salud pública.

Por supuesto que impulsamos la más amplia solidaridad con todos los sectores que lo necesitan, familias pobres, despedidos, trabajadores de la salud. Y acompañamos a los sectores que ven la necesidad de la solidaridad. Pero, como dirigentes de sindicatos combativos, el primer paso es la exigencia a que sea el gobierno el que lo garantice, sin arriesgar la salud de los docentes y las familias. A través de denuncias sólidas, como las que hemos realizado obligando al gobierno a cambiar su postura pública sobre la educación virtual, por ejemplo. Con todo tipo de acciones, inclusive la movilización de ser necesaria, con todos los cuidados sanitarios. Pero exigiendo al gobierno que utilice los fondos para educación, salud, salarios, ayuda social, en vez de para la deuda o subsidiar y ayudar a los grandes empresarios y multinacionales.

## SINDICAL

### Frigorífico Penta: luchar para ganar

Escribe **Martín Fú**

Se cumple un mes que los 240 trabajadores del frigorífico ubicado en Quilmes no cobran sus salarios. La planta del empresario peronista Ricardo Bruzzese sigue con el lockout patronal, desconociendo la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.

Los trabajadores han iniciado una olla popular en los portones del establecimiento y le exigen al gobernador Kicillof que haga cumplir las resoluciones ministeriales que obligan a la patronal dar marcha atrás con el lockout, pagar jornales caídos y volver a la producción. El frigorífico es una rama esencial (producción de alimentos) y en medio de la pandemia y la crisis económica y social generada, no puede permanecer cerrado.

Sin salarios y sin obra social, ya que Bruzzese no paga

el aporte a la obra social, los trabajadores de Penta denuncian que la planta está ocupada por un grupo de barrabravas y que la patronal continúa con la ofensiva contra los delegados. Por esta situación, los trabajadores se movilizarán, el miércoles 22, a Plaza de Mayo para que el gobierno nacional les dé una respuesta a sus reclamos y seguir visibilizando el conflicto al conjunto del pueblo trabajador.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad acompañamos a los trabajadores en esta dura lucha contra esta patronal negrera, mafiosa y con marcadas prácticas antisindicales. A una semana de la brutal represión de la que fueron víctimas por luchar por su fuente de trabajo, exigimos el pago inmediato de los salarios adeudados, que la planta se ponga a producir y que Bruzzese



cese en sus prácticas antisindicales. De no ser así es imperioso estatizar el frigorífico con todos los trabajadores adentro y reanudar de manera inmediata la producción de alimentos.

## El Pollo Sobrero fue a apoyar a los trabajadores de Penta

Escribe **Martín Fu**

Una delegación de los ferroviarios del Sarmiento, encabezados por Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Seccional Buenos Aires Oeste y referente nacional del sindicalismo combativo, se hizo presente en el corte frente al frigorífico Penta organizado por sus trabajadores. Sobrero, dirigiéndose a los trabajadores, dejó la solidaridad de los

ferroviarios poniéndose a disposición para lo que necesiten y colaborando con el fondo de lucha. El Pollo aprovechó la ocasión para repudiar la represión de la policía bonaerense. El dirigente ferroviario llamó a “cerrar filas para que este conflicto triunfe, porque los trabajadores tenemos que estar ahora más unidos que nunca”.



## NOTICIERO SINDICAL

### Denuncia del Sutna

La combativa dirección del Sutna (neumático) ha denunciado a las patronales de Fate y Bridgestone por incumplir las normas exigidas por el protocolo de seguridad ante la pandemia de Covid-19, tras la habilitación del sector para retomar la producción. Los compañeros distribuyeron un comunicado donde aseguran “insistir con la consideración central, ningún trabajador debe volver a producir sin un cuadro de extremos cuidados en las medidas de seguridad y que se le haya dado la información que justifique con claridad que con su trabajo colabora con el conjunto de la población y no de la ganancia patronal”.

### Paro de la UTA

La Unión Tranviarios Automotor paró en el interior del país por salarios adeudados desde marzo. La medida de fuerza fue garantizada en todas las provincias, menos en Buenos Aires, que si bien había sido parte inicial de una acción unificada y de alcance federal, por decisión de Roberto Fernández, titular del gremio, rápidamente se desmarcó y así le restó peso. Santa Fe no adhirió por no tener atrasos en los salarios.

Esta situación es más grave en las ciudades del interior, donde las empresas aducen “baja en la recaudación” y así se aprovechan para rebajar o directamente dejar de pagar los salarios de los choferes.

### Trabajadores de McDonalds y Burger King avanzan con su lucha

La semana pasada los trabajadores de McDonalds y Burger King dieron un paso adelante en la pelea contra

sus patronales. Mediante las acciones que realizaron visibilizando su conflicto en las redes sociales, en la televisión y con el apoyo que recibieron entre jóvenes trabajadores lograron que les reconozcan el pago de la segunda quincena de marzo al 100% con el presentismo incluido. Las empresas les habían pagado tan solo el 30% de su salario por esa quincena y les habían quitado el presentismo. El acuerdo firmado por el sindicato de pasteleros establece que, a partir de ahora y durante el tiempo que dure la cuarentena, las horas para los que trabajen bajo la modalidad de delivery y el servicio de Auto Mac serán también

pagadas al 100%, y las horas no trabajadas serán pagadas al 70% pese a que el contrato de trabajo del sector fija que la empresa garantiza el empleo por un mínimo de treinta horas semanales. Este punto del acuerdo se impuso sin el consentimiento de los trabajadores y muestra los límites que tiene la burocracia de pasteleros, que actúa al servicio del ajuste de empresas multinacionales que ganan miles de millones de dólares en todo el mundo y precarizan de forma absoluta a sus empleados. Seguimos apoyando a los trabajadores de comidas rápidas en su lucha por cobrar el 100% de su contrato de trabajo como corresponde.

### San Fernando: Bingo King reduce 30% los salarios

Los cuatrocientos trabajadores del Bingo King denunciaron a la patronal por depositar sus salarios de manera tardía y con una reducción unilateral de 30%. El presentismo y la antigüedad no fueron respetados durante la cuarentena decretada por el gobierno nacional y esto significó una reducción sensible en la liquidación de los salarios.



El dueño de la empresa anunció a los empleados que solo pagaría el sueldo básico, decisión que habrían tomado desde la cámara que nuclea a los empresarios del juego.

### Tempur-Sealy

El gigante internacional de los colchones y mayor fabricante de su rubro, Tempur-Sealy, ha lanzado una abierta extorsión a sus trabajadores. Intenta flexibilizar reduciendo los salarios 50%, que los trabajadores “devuelvan” las horas de producción de sus compañeros que están afectados a la cuarentena y busca que la planta de Bed Time en Pacheco se achique a la mitad del personal existente y que las futuras indemnizaciones se calcule sobre el 50% del salario básico. La empresa adeuda sueldos y diferencias salariales y solo se compromete a saldarlos si los trabajadores aceptan estas rebajas y la reducción de la planta. Estas propuestas muestran el espíritu negro y de impunidad de estas patronales. En asamblea de los turnos mañana y tarde se rechazó “la provocación de la empresa”, según un comunicado que difundió la comisión interna.

## MUJERES

## Ni una menos: que se declare ya la emergencia en violencia de género

Anisa Favoretti, nuestra compañera referente de Isadora en Santiago del Estero, nos envió el 16 de abril el comunicado que redactó la Coordinadora por la Aparición con Vida de Priscila Martínez, integrada por organizaciones de mujeres de la zona. El texto empezaba con el peor anuncio: “Con gran dolor confirmamos la noticia del femicidio de Priscila”. Bronca, mucha bronca y más bronca nos dio porque hacía menos de veinticuatro horas que nos habíamos enterado de otros dos femicidios: el de Camila Tarocco en Moreno, y el de Jéssica Minaglia en Santa Cruz. Rápidamente convocamos al #ViernesDeFuria en las redes exigiendo que se declare la emergencia en violencia de género ya.



Escribe **Mercedes Trimarchi**  
Diputada bonaerense Izquierda Socialista/FIT

¿Por qué reclamamos esto? Simplemente porque nos están matando y lo hacen a diario. Con la movilización logramos imponer que ya no se hable de “crímenes pasionales” y que se reconozcan como lo que son: femicidios. A pesar de que aún no existe ningún organismo oficial que lleve un registro unificado, distintos observatorios ligados a organizaciones feministas hacen un seguimiento de los casos.

En los últimos años distintos gobiernos provinciales, tomando esos datos como referencia, fueron declarando la emergencia en violencia de género. Por ejemplo, en la provincia

de Buenos Aires en el año 2012 se declaró por dos años (ley 14.407) y luego se extendió hasta 2016. En Salta se estableció mediante el decreto 2.654 en el año 2014. En Chaco, también por dos años desde junio de 2019, y así en varias provincias más. Pero estos proyectos fracasaron en sus intenciones porque no fueron acompañados con presupuestos acordados para sostener la estructura que se requiere para garantizar los derechos de las víctimas.

Las personas que sufren diferentes formas de violencia necesitan asistencia y acompañamiento por parte del Estado para poder salir de esa situación. Lo primero y básico es garantizar la posibilidad efectiva de denunciar cuando van a la comisaría o al juzgado, ser escuchadas y que se arbitren las

medidas necesarias para separar al agresor del lugar donde conviven. Luego, que se le dé prioridad a la causa por su urgencia y se les otorgue patrocinio legal gratuito para que las causas avancen, reclamo que está legislado pero que no se implementa. Recordemos que, en la mayoría de los casos de femicidio, se habían realizado denuncias previas.

Además, es muy importante el acompañamiento psicológico inmediato con perspectiva de género para garantizar la estabilidad y el bienestar emocional de las mujeres y de las demás personas que también fueron víctimas. Los refugios transitorios son necesarios cuando se corre peligro de vida, pero no alcanzan. Es clave garantizar también una vivienda para ellas y sus hijes y un subsidio económico sobre la base de la canasta básica, pues sin acompañamiento, vivienda y sustento económico es muy difícil salir del círculo de la violencia.

Estas medidas urgentes son necesarias para acompañar a quienes sufren violencia de género y ayudarlas a salir de esta traumática situación. El presupuesto actual, heredado de la gestión de Macri, que destina 11 pesos por mujer por año para combatir la violencia de género no alcanza. Por eso, insistimos que se necesita declarar la emergencia nacional en violencia de género con una asignación económica acorde. Estas medidas básicas de acompañamiento a las víctimas se pueden garantizar con un impuesto especial a las grandes fortunas, dejando de subsidiar a la Iglesia Católica y no pagando la deuda externa.

## Larreta y su cuento sobre cuidar a los adultos mayores

Escribe **Ana Val**  
Referente de Unión Trabajadores  
Jubilados en Lucha

En medio de la cuarentena el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que, a partir del lunes 20, los mayores de 70 años teníamos que pedir autorización para salir de nuestras casas, a través de un llamado telefónico al 147 porque significaba romper la cuarentena.

Este anuncio fue repudiado por un amplio abanico de personalidades, de todo tipo, junto a sectores populares, por eso tuvieron que retroceder en su intento. Fue claramente una actitud autoritaria, un atropello a las libertades democráticas, al derecho de circular que tenemos todos los ciudadanos y fundamentalmente los adultos mayores; quienes cumplimos



con la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

El gobierno de Larreta explica que “es para cuidarnos, porque somos un sector de alto riesgo”. Pero, al mismo tiempo, bajó a la mitad los bolsones de alimentos de los comedores

escolares y de los comedores para adultos mayores y personas en situación de calle.

Los adultos mayores no somos deficientes ni negligentes, como para que nos hagan pedir permiso para salir de nuestros hogares. El jefe de gobierno del PRO tendría que estar preocupado y actuando sobre los dos mil residentes de los geriátricos que gestiona. Donde todos los días hay un nuevo contagio, según informan los medios de comunicación.

¿Sabe Larreta que el valor de cinco de los barbijos que compró su gobierno equivalen a una jubilación mínima? Los funcionarios que hicieron esta operación realmente escandalosa le presentaron la renuncia, pero eso no alcanza. Reclamamos plata para los comedores, para los asilos y que los funcionarios devuelvan, de su patrimonio personal, la diferencia entre el valor de un barbijo en la farmacia y los 3.000 pesos que pagaron.

## INTERNACIONAL

### ¡A liberar los 2500 presos y presas del estallido social en Chile!

Son 2.500 presas y presos, en su mayoría jóvenes, que purgan en la cárcel su osadía de haber participado de las grandes movilizaciones contra el gobierno superexplotador de Piñera. Muchos de ellos llevan más días en la cárcel que el tiempo de una eventual condena. Se trata de una represión deliberada para intimidar a los millones que salieron, desde octubre de 2019, a las calles en contra de los abusos y por justas demandas de cambios sociales y democráticos.

Con 2.500 presas y presos el afán intimidatorio de Piñera es evidente, está diciendo: “Si tú peleas por mejores condiciones de vida irás preso”.



Este reclamo de libertad se hace hoy más urgente ante el peligro de contagio del coronavirus en cárceles superpobladas y en medio de delinquentes comunes.

El estallido social contra el gobierno de Piñera tuvo un amplio apoyo, solidaridad y simpatía de los pueblos del mundo. Apelamos a esa solidaridad para iniciar una campaña internacional que inunde por las redes, con fotos o videos, el clamor unánime por la liberación de los 2.500 presos políticos.

Unidad Internacional de Trabajadoras y  
Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)  
18 de abril de 2020



Escribe **Miguel Sorans\***

El escritor chileno Luis Sepúlveda murió en el Estado español el jueves 16 de abril por coronavirus, según confirmó su familia. Sepúlveda, quien había sido diagnosticado con la infección a finales de febrero, estaba internado en el Hospital Universitario Central de Asturias. El escritor, de 70 años, comenzó a mostrar los síntomas el pasado 25 de febrero, después de regresar de un festival literario celebrado en Oporto, ciudad del norte de Portugal. Desde hacía varios años estaba radicado, junto a su familia, en Asturias.

Lamentamos mucho esta noticia. Sepúlveda fue un importante escritor pero también fue un militante de causas justas. Entre ellas, la lucha revolucionaria para terminar con la dictadura de Somoza en Nicaragua. Tuvimos el honor de que Sepúlveda participara en la revolución nicaragüense junto a la Brigada Simón Bolívar, que impulsó nuestra corriente socialista. Fue una brigada de combatientes latinoamericanos

### Murió de coronavirus el escritor chileno Luis Sepúlveda que actuó junto a la Brigada Simón Bolívar en la revolución sandinista

que se impulsó desde Bogotá, bajo la iniciativa del dirigente argentino Nahuel Moreno, exiliado entonces, y del PST (Partido Socialista de los Trabajadores) de Colombia, que encabezaba una campaña internacional sistemática de apoyo a la lucha contra la dictadura de Somoza y de solidaridad con el FSLN para que triunfara y encabezara un gobierno propio, sin burgueses.

Ex militante comunista, Sepúlveda se vio obligado a abandonar su Chile natal en 1977 perseguido por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Se dio a conocer internacionalmente en 1988 con la publicación de *Un viejo que leía novelas de amor*. A esa exitosa obra le siguieron *Mundo del fin del mundo*, *Nombre de torero*, *Patagonia express*, *Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar*, *La rosa de Atacama* y *Fin de siglo*, entre otras.

Recibió varios premios, el de poesía Gabriela Mistral (1976), Rómulo Gallegos (1978), el de narrativa Superflaiano (1993) y el Premio Ovidio, concedido en 1998 en Italia por *La última frontera*.

Justamente, en la novela *Nombre de torero*, uno de los protagonistas es un exiliado chileno, Juan Belmonte, que sería el que tiene nombre de torero. En la trama de ficción Belmonte cuenta que participó en la Brigada Simón Bolívar y que fue reprimido por el gobierno sandinista. En esa trama

se mezclan personajes de la siniestra Stassi, policía de la antigua Alemania Oriental, con la policía de Pinochet y la caída del Muro de Berlín.

En una revista española Sepúlveda recordaba a la brigada el día del triunfo de la revolución: “En julio de 1979, exactamente el 19 de julio de ese año al atardecer, me encontraba sentado en la escalinata que conduce a la catedral de Managua. Los sandinistas habían derrotado al dictador Anastasio Somoza y yo estaba ahí entre los sobrevivientes de la última brigada internacional, la Simón Bolívar, y compartía entre veinte o más una petaquita de ron nica y unos cigarrillos atrechos que hacían los indios misquitos. Había alegría, mas no euforia, pues todas las guerras avanzan y duran más de lo que uno pensaba. La mayoría de los combatientes eran muy jóvenes, celebraban la esperanza y lo que harían de su país en medio de la más limpia y pura utopía, eran ajenos a la guerra fría o a los planes que ya se tejían en Washington. En esos momentos uno solo piensa en sus muertos y a ratos le resulta injusto haber sobrevivido”. (*Revistateina* N° 16. Octubre de 2007. Revista electrónica de Valencia).

\*Integrante de la Coordinadora de la Brigada Simón Bolívar y actual dirigente de Izquierda Socialista de la Argentina y de la UIT-CI [www.uit-ci.org](http://www.uit-ci.org)